



Declaración Final del XXI Congreso Latinoamericano de Sociología

São Paulo, Brasil - 1997

El XXI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, reunió en Sao Paulo, entre los días 31 de agosto y 5 de septiembre de 1997, a más de mil especialistas de todas las disciplinas de las Ciencias Sociales, quienes participaron en cuatro conferencias magistrales, veintidós mesas redondas y veintidós comisiones de trabajo.

En un ambiente de pluralidad se discutieron los trabajos de los participantes y se logró un estimulante intercambio de conocimientos. Reunidos los asistentes en la Asamblea Final del Congreso, se acordó emitir la siguiente declaración: “Las tendencias hegemónicas de la globalización han significado un inmenso proceso de reacomodo de las relaciones de poder. La concentración del poder militar, político, económico, tecnológico, financiero y comunicacional en unos pocos Estados, organizaciones y empresas transnacionales, está acelerando la segregación y exclusión de la gran mayoría de la población del mundo.

Prevalece un modelo de desarrollo y organización sociopolítica en el cual los intereses del lucro de las minorías se imponen sobre todo otro valor o interés humano. Se trata igualmente de un modelo que para su reproducción requiere un violento y permanente asalto depredador de la naturaleza y es por ello absolutamente insustentable, en cuanto pone en peligro la vida misma en el planeta Tierra. Las reformas impuestas a los países latinoamericanos no son aplicadas en los países hegemónicos para reducir el gasto público, controlar la deuda interna y externa, o disminuir el proteccionismo.

En cambio, los programas actuales de los gobiernos de la mayor parte de nuestros países profundizan el proceso de privatizaciones de empresas públicas estratégicas, la subvención fiscal a los grandes capitalistas transnacionales, el subsidio masivo a la banca y una reestructuración productiva con la pérdida de derechos conquistados por las luchas históricas de los trabajadores del subcontinente. Los resultados de cerca de dos décadas de ajustes estructurales y reforma del Estado están a la vista: una inmensa masa de desempleados y subempleados, la precarización de los empleos y de los servicios de seguridad social, salud y educación, el incremento de la violencia social y política, y la pérdida prácticamente total de la soberanía económica y política de las



naciones latinoamericanas. Hoy existen en la mayoría de nuestros países regímenes de democracia representativa. En ellos se manifiesta la lucha entre concepciones, proyectos, fuerzas y tendencias orientadas en sentidos diversos. Por un aparte, se plantea una opción que favorece la creciente concentración del poder económico y político, la exclusión mayoritaria y la práctica de programas encaminados a reforzar el control social, asegurar la gobernabilidad y limitar la participación popular en la vida pública. Por otra, la democracia ha servido para ampliar la presencia de las colectividades, la formación de redes horizontales de las organizaciones culturales, políticas y de los movimientos sociales; para estimular y profundizar el cambio en las formas y medios mismo de la actividad pública, el establecimiento de nuevas relaciones y vías de comunicación alternativas, el establecimiento de los principios de una institucionalidad participativa y de una cultura democrática.

En su versión restringida, la democracia representativa ha conducido al abuso de las atribuciones presidenciales, a la toma de decisiones al margen de todo debate democrático; al favorecimiento de diversas formas tendientes a asegurar la continuidad de las políticas económicas neoliberales; a la ampliación de la presencia de las fuerzas armadas en la vida política; al desborde del enriquecimiento ilícito, la corrupción y la emergencia de ostensibles vinculaciones entre numerosos funcionarios públicos y el narcotráfico. El hostigamiento a movimientos populares, la identificación de los pobres como “delincuentes” y la represión como recurso permanente para enfrentar demandas no resueltas; constituyen grandes limitaciones para una genuina democracia. No obstante, la ampliación de derechos políticos y la participación de fuerzas opositoras permiten que se expresen intereses diversos a los del poder, legitima y fortalece la resistencia popular en contra de los programas de gobierno. La riqueza de experiencias y propuestas democráticas surgidas en los últimos años es notoria. Expresión suya son movimientos sociales como el de los Sin Tierra en Brasil, el de los estudiantes universitarios en Chile y Nicaragua, el de los empleados públicos en Argentina y Venezuela, de los coccaleros en Bolivia y Colombia, el de las asociaciones en lucha por los derechos humanos en Honduras y Paraguay, el de los movimientos indígenas en México, Guatemala y Ecuador, los de las mujeres y los de las minorías en todo el subcontinente.

En América Latina se han consolidado partidos y frentes políticos democráticos que favorecen la realización de experiencias de gobierno participativo en municipios y regiones, y apuntan hacia la ampliación de una conciencia y una práctica en la gestión pública, hacia la apertura de espacios no estatales de acción colectiva, la orientación de proyectos alternativos de desarrollo y el establecimiento de formas de representación incluyentes en todos los ámbitos. El potencial de las universidades públicas y de los centros de investigación como generadores de conocimiento, como difusores de prácticas sociales democráticas, como estudiosos de experiencias colectivas novedosas, es crucial. Nuestras universidades públicas se han visto sometidas a restricciones presupuestarias, a modelos tecnocráticos y de desarticulación de la investigación, la docencia y



la difusión. La evaluación basada en criterios productivistas y eficientistas atenta contra la producción de un conocimiento creativo y con responsabilidad social, ya que impone normas de rentabilidad que son ajenas e inadecuadas para la actividad docente y de investigación. Por estas razones, los científicos sociales debemos aplicarnos más que nunca en la defensa y ampliación de estos espacios de pensamiento crítico y continuar abriendo horizontes de conocimiento que favorezcan la solución de los grandes problemas sociales que viven nuestros pueblos. La Asociación Latinoamericana de Sociología ratifica su compromiso con el impulso de un pensamiento latinoamericano propio, no colonial, identificado con los problemas y las luchas de las mayorías, con el objetivo de alcanzar una democracia de todos y para todos, sin exclusiones ni excluidos de la misma.